



República de Colombia
Distrito Judicial de Valledupar
Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes
Calle 16 N° 9-30, Quinto Nivel, Edificio Caja Agraria. Tel: 095-5747656
Valledupar-Cesar.

VALLEDUPAR SEPTIEMBRE VEINTICUATRO (24) DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).

| | |
|------------------|---|
| REF: | ACCIÓN DE TUTELA. |
| Accionantes: | MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ |
| Accionada: | CORPORACION AUTONOMA DEL CESAR - CORPOCESAR |
| Der. Vulnerados: | IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y AUTODETERMINACION DE LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS RAIZAL Y PALENQUERA |
| Radicación: | 20001-40-71-003-2019-00259-00. |

1. OBJETO A DECIDIR.

Siendo el momento oportuno se procede a tomar la decisión que en derecho corresponda, estando dentro del término legal en ésta ACCIÓN DE TUTELA, impetrada por **MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ** en contra de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales antes enunciados.

2. HECHOS RELEVANTES.

MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ, en virtud del Decreto 2591 de 1991, instaura la presente acción constitucional, basada en los siguientes supuestos fácticos¹:

- Que esa comunidad se encuentra organizada a través de un consejo de comunidades, tal como lo establece la Ley 70 de 1993, y el Decreto 1745 de 1993, significando ello que existe un pleno reconocimiento, por parte de la Alcaldía Municipal de este grupo étnico.
- Que de sesenta (60) consejos comunitarios solo podrían participar 12, del Departamento del Cesar máxime en un departamento que tiene varios espejos de aguas – cenagosos y una minera voraz que impacta el medio ambiente, los consejos comunitarios con certificación del Ministerio son:

Corregimiento de Guacochito – Valledupar,
Corregimiento de Badillo – Valledupar,
Corregimiento de los Venados – Valledupar,
Corregimiento El Perro – Valledupar,
Corregimiento de Guaymaral – Valledupar
Corregimiento de la Victoria de San Isidro – La Jagua de Ibirico,
Corregimiento de la Palmita – La Jagua de Ibirico,
Territorio de Varias Veredas pertenecientes a la Jagua de Ibirico “Coacneja”,
Corregimiento de la Loma – El Paso,
El “Alejandro Duran” – El Paso,
Corregimiento de la Sierra – Chiriguaná.

Que el 31 de julio de 2019, el Director de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CESAR “CORPOCESAR”, realiza la convocatoria por medio el periódico el pilón, donde dice: “a los

¹ Ver Folios 1 al 6 de la tutela; **HECHOS**

consejos comunitarios de las comunidades negras de área de jurisdicción de CORPOCESAR, a la reunión que se llevará el 13 de septiembre de 2019, 2:30 p.m., en la sala de Juntas de Corpocesar, frente a la feria Ganadera, con el fin de elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Que en dicha convocatoria se hace exigible aportar un requisito que vulnera los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos cual hace que ellos, no puedan participar del proceso, consistiendo en lo siguiente: *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.”*

Resalta que el requisito anterior fue solicitado en la convocatoria de la corporación autónoma de la Guajira, en el cual, mediante acción de tutela de fecha 24 de septiembre de 2015, del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Riohacha – La Guajira, fue suprimida de dicha convocatoria, el literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076, que dice: *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción”*, debido a que es excluyente frente a los consejos comunitarios que solo tienen reconocimiento municipales y frente a quienes tienen certificado del Ministerio del Interior y no tienen territorios colectivos adjudicados o en trámites de adjudicación esto por situaciones imputables a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.

Que el proceso en ningún momento regula la etapa de revisión de propuestas solo una convocatoria para la referida postulación y la etapa de elección, lo cual implica que la corporación está incluyendo requisitos o procedimientos adicionales a los que establece la normatividad vigente, lo que se convierte en una violación flagrante al debido proceso, que el Decreto 1523 de 2003, en su artículo 1º refiere:

“Convocatoria. Para la elección del representante y suplente de las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, el director General de la respectiva Corporación formulará invitación pública a los respectivos Consejos Comunitarios, en la cual se indicaran los requisitos para participar en la elección, así como el lugar, fecha y hora para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección.

La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de amplia circulación regional o nacional con treinta (30) días de anterioridad a la fecha de realización de la elección, y se difundirá por una sola vez por medio radial o televisivo”.

Que el Decreto 1523 de 2003, en artículo 3, refiere: *“Revisión de la documentación. La Corporación Autónoma Regional revisará los documentos presentados y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos. Posteriormente elaborará un informe al respecto, el cual será presentado el día de la reunión de elección”*. Que se ratifica este mismo decreto en su artículo 6, que contiene el trámite de la elección, expuesto así: *“a) El Director General de la Corporación Autónoma Regional instalará la reunión para elección dentro de la hora fijada en la convocatoria pública y procederá a dar lectura del informe resultante de la revisión de la documentación aportada por los Consejos Comunitarios participantes. Los Representantes Legales de los Consejos Comunitarios que hayan cumplido los requisitos consignados en el presente decreto tendrán voz y voto, en la reunión de elección del representante y suplente”*.

Insiste en considerar que la accionada incluyó una etapa adicional al proceso, la cual no está contemplada en el marco normativo que regula la materia, *“y que efectivamente rayan con los principios y derechos fundamentales como debido proceso, transparencia, moralidad pública y otros”*.

3. PETICIONES.

Con fundamento a la relación fáctica dada a conocer por la accionante **MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ**, actuando como representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la regio del Cerro de la Falta y el Carbonal **“ENUEMIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ”** Corregimiento de PATILLAL, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, en su escrito de tutela, solicita lo siguiente:²

- Se ordene al Director de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – JULIO SUAREZ LUNA**, que se les permita a todos los consejos comunitarios a elegir y ser elegidos de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, con voz y voto que no tengan títulos colectivos o en trámite a inscribirse y participar en la escogencia del representante de la Etnia de las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizal y Palanquera del Departamento del Cesar, ante la Junta Directiva de la Corporación – CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.
- Se ordene a la demandada, que se realice una nueva convocatoria donde se incluyan todos los consejos comunitarios con voz y voto que tengan o no certificación de la agencia nacional de tierras en tramites o adjudicada.
- Se ordene a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR, que de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política se puedan incluir a las convocatorias otras formas organizativas de las comunidades negras a la respectiva corporación caso específico de las organizaciones de base.

4. ACTUACIÓN PROCESAL.

Dentro del trámite de la presente acción de tutela se ordenó oficiar al Representante Legal de la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR**, para que en el término de dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación, enviara a este juzgado respuesta sobre los hechos alegados por la accionante. Igualmente, se ordenó tener como prueba las copias de los documentos enunciados y aportados por la parte accionante en el acápite correspondiente y los demás que se aportaran a este trámite. Por último, se ordenó notificar por el medio más expedito al Representante Legal de la accionada, a la accionante y a todo aquel que tenga un interés directo en el resultado de la misma.

La parte accionante solicita medida provisional, la cual el Despacho se abstuvo de decretar, en razón a que de los documentos aportados como pruebas, no se desprende la existencia de un peligro inminente, perjuicio irremediable en contra de la accionante, lo cual quedaba sujeto a la decisión de fondo que haya de emitirse en su debido momento.

5. CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACCIONADA³

5.1. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR

Mediante escrito, remitido el 16 de agosto de 2019, por correo electrónico, **JULIO RAFAEL SUAREZ LUNA**, en su calidad de Director General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, se pronuncia con relación a los hechos y pretensiones expuestos por la demandante, en los siguientes términos:

² Ver Folio 5 de la tutela. **PETICION**.

³ Ver folio 19 al 23

- Que mediante convocatoria pública, se realizó invitación a las comunidades negras, domiciliadas en el área de jurisdicción de CORPOCESAR, - todo el Departamento del Cesar – a participar en la elección de un (1) representante miembro principal y su respectivo suplente ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023.
- Que en esa convocatoria se estableció, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de mayo 26 de 2015, expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los Consejos Comunitarios que aspiren a participar en la elección de su representante ante el Consejo Directivo, allegaran a la CORPOCESAR, con anterioridad mínima de quince (15) días, a la fecha establecida para la reunión de elección, los siguientes documentos:
 - a). *Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo en la que conste la ubicación del Consejo Comunitario, la Inscripción de la Junta y de su representante legal.*
 - b). *Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (Agencia Nacional del Tierras), sobre la existencia de territorio s colectivos legalmente titulados o en tramites*
 - c). *Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del miembro de la comunidad postulado como candidato.*
- Que en procedimiento de elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, fue reglamentado inicialmente a través del Decreto 1523 de 2003, cuyo artículo establece los mismos requisitos antes descritos.
- Que no es procedente, por ser contrario a la Ley, la pretensión de la accionante, en el sentido de ordenar al director de CORPOCESAR, permitir a todos los consejos comunitarios a elegir y ser elegidos, sin acreditar títulos colectivos o en trámites de inscripción, y participar en la escogencia del representante de la etnia de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal palanquera del Departamento del Cesar ante la Junta directiva de CORPOCESAR, teniendo en cuenta que los requisitos establecidos deben acreditarse en su totalidad.
- Que en el presente caso, las condiciones dispuestas en la Convocatoria Pública demandada, no vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y la participación de la parte accionante, ni mucho menos, figuran discriminación étnico racial y territorial, en tanto en la referida convocatoria se establecieron unos mismos requisitos para todos los Consejos Comunitarios del Departamento del Cesar, los cuales se encuentra debidamente soportados en el ordenamiento legal.

6. PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde determinar al Juzgado, si **LA CORPORACION AUTONOMA DEL CESAR – CORPOCESAR**, le está vulnerando los derechos fundamentales a la señora **MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ**, representante legal del Consejo Comunitario de comunidades negras raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la Región del Cerro de la Falda y el Carbonal **“EUNEMIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ”**, los derechos fundamentales **“A LA IGUALDAD, A LA PARTICIPACION, DEBIDO PROCESO Y A LA AUTONOMIA Y AUTO DETERMINACION LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUIERA”**, al exigir para la convocatoria para elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)”, como requisito: *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de*

Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.”

7. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el legislador.

En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, *“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”*, establece lo siguiente:

“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

8. CASO CONCRETO.

En solicitud de amparo constitucional, la señora **MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ**, en su condición de representante legal del Consejo Comunitario de comunidades negras raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la Region del Cerro de la Falda y el Carbonal **“EUNEMIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ”**, pide la protección de los derechos fundamentales **“A LA IGUALDAD, A LA PARTICIPACION, DEBIDO PROCESO Y A LA AUTONOMIA Y AUTO DETERMINACION LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUIERA”**, los que estima vulnerados por la accionada la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**, al exigir a los consejos comunitarios de las comunidades negras ...con el fin de elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción.”*, lo que a su entender, vulnera los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos lo cual hace que ellos, no puedan participar en el proceso aludido.

En ese orden, pretende que la demandada les permita elegir y ser elegidos de acuerdo al artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, con voz y voto, aunque no tengan títulos colectivos o en trámite a inscribirse y participar en la escogencia del representante de la Etnia de las Comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizal y Palanquera del Departamento del Cesar, ante la Junta Directiva de la Corporación – CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, por lo solicita realice una nueva convocatoria donde se incluyan tengan o no certificación de la agencia nacional de tierras en tramites o adjudicada.

Frente a las pretensiones planteadas por la accionante, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, ha considerado que en la elección del representante y suplente de las comunidades negras ante los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, fue

reglamentado inicialmente a través del Decreto 1523 de 2003, cuyo artículo establece entre los requisitos aquel que exige la “*Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (Agencia Nacional del Tierras), sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en tramites*”, por lo que no es procedente, por ser contrario a la Ley, la pretensión de la accionante, en el sentido de ordenar al director de CORPOCESAR, permitir a todos los consejos comunitarios a elegir y ser elegidos, sin acreditar títulos colectivos o en trámites de inscripción, y participar en la escogencia del representante de la etnia de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal palanquera del Departamento del Cesar ante la Junta Directiva de CORPOCESAR, teniendo en cuenta que los requisitos establecidos deben acreditarse en su totalidad.

Ha expuesto la Honorable Corte Constitucional, en **Sentencia T-576/14** Referencia: expediente T-3482903 Acción de tutela promovida por Moisés Pérez Casseres contra el Ministerio del Interior. **Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA**, lo siguiente:

*“5.48. De conformidad con lo expuesto en las líneas anteriores, la Sala pudo establecer que la participación de las comunidades negras en la elección de los integrantes del espacio nacional que las representarían para efectos de la consulta previa de las medidas de amplio alcance que pudieran afectarlas **no podía supeditarse a que contaran con un título colectivo adjudicado por el Incoder ni a ningún criterio que limitara su derecho a autodeterminarse y a reivindicar, en ejercicio de su identidad diversa, su status como titulares de derechos étnicos.***

Sobre ese supuesto, decidió conceder el amparo de los derechos fundamentales que el Ministerio del Interior les vulneró a las comunidades organizadas en el Palenque Afrourbano de Tumaco, la Asociación de Mujeres Afrodescendientes y del Caribe Graciela Cha-Inés, la Asociación de Consejos Comunitarios de Negritudes del Norte del Cauca, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Juan Oval Arrincón Amela, la Asociación de Organizaciones de Comunidades Negras del Cesar “Ku-Suto” y la Asociación Municipal de Consejos Comunitarios Afrodescendientes del Municipio de Suárez, Cauca, que no pudieron participar en las asambleas departamentales en las que se eligieron a los delegados del referido espacio de consulta por no acreditar que contaban con un territorio colectivo adjudicado. Dado que dicha infracción iusfundamental se estructuró por cuenta de las limitaciones impuestas por la Resolución 121 de 2012, la Sala levantará la medida cautelar que impuso sobre dicho acto administrativo en diciembre de 2012 y lo dejará sin efectos. Lo propio dispondrá respecto de los actos administrativos que se expidieron a su amparo, en particular, el Decreto 2163 de 2012.

Ahora bien, la Sala fue enfática al precisar que su decisión no se limitaría al caso concreto, sino a solucionar la problemática estructural relacionada con la ausencia de una instancia nacional de consulta previa de las medidas de amplio alcance que puedan representar una afectación directa para las comunidades negras, raizales y palenqueras del país. Fue en ese contexto que dio cuenta de los parámetros que pueden contribuir a dilucidar los dilemas asociados a la atribución de la titularidad de derechos étnicos y que destacó las disposiciones normativas y las reglas jurisprudenciales que deben guiar el desarrollo de los procesos consultivos, para asegurar la garantía plena de este derecho fundamental que, como se dijo, es esencial para la salvaguarda de la integridad cultural y la subsistencia de los pueblos étnica y culturalmente diversos.

En ese orden de ideas, advirtió la necesidad de impartir unas órdenes de protección que permitan superar los efectos que comporta, para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras el hecho de no haber contado con esa instancia de consulta. Esa circunstancia tiene unas implicaciones concretas.

(...)

Lo verificado en este trámite constitucional acerca de los distintos factores que han impedido constituir una instancia nacional de consulta previa de las comunidades negras exige, además, formular una solución que impida incurrir, nuevamente, en los errores que en el pasado bloquearon las iniciativas para integrar ese espacio. Dado que, para la Sala, la problemática que se ha

suscitado al respecto ha tenido que ver con que el Estado ha pretendido imponer su visión sobre las organizaciones que deberían representar a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en ese escenario, en lugar de cumplir con el compromiso que le impone el Convenio 169 de la OIT en relación con la necesidad de facilitar un espacio para que sean las propias comunidades las que decidan cuáles son sus instituciones representativas, ordenará realizar un proceso consultivo para el efecto.

En línea con lo que aquí se ha expuesto, dicho proceso de consulta deberá permitir la participación de todas aquellas comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras que se consideren con derecho a participar en él, sean rurales o urbanas, y con independencia de la forma organizativa que hayan adoptado, siempre que, en ejercicio de su autonomía, designen a un delegado que las represente en tal escenario”.

Por otro lado, la Honorable Corte Constitucional, en **Sentencia T-681/16** Referencia: expediente: T-5.723.146 Acción de tutela interpuesta por María Dolores Lenis Hernández contra la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín. Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, ha explicado que:

“5.1. La excepción de inconstitucionalidad se erige a partir del artículo 4º de la Constitución Política que establece que, cuando existen normas contrarias a la Constitución, se emplearan las medidas contenidas en la Carta Política debido a su superioridad jerárquica.

Esta Corporación ha sido enfática en que se trata de una facultad-deber que tienen las autoridades para inaplicar una norma y en su lugar hacer efectiva la Constitución, consolidándose como una suerte de control de constitucionalidad difuso. Sobre este aspecto, la jurisprudencia constitucional ha definido que *“es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales”*. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas dentro de la Constitución Política”⁴.

En este sentido consiste en una eficaz herramienta jurídica-política de protección al principio de supremacía constitucional, garantizando (en el caso concreto) su jerarquía y materialidad dentro del sistema de fuentes del derecho.

5.2. Dicha facultad puede ser ejercida de manera oficiosa⁵ o a solicitud de parte cuando se está frente a alguna de las siguientes circunstancias:

(i) La norma es contraria a las cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez que *“de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia judicial, incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado”*⁶;

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexecutable por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso⁷; o,

⁴ Sentencia SU-132 de 2013.

⁵ Sentencia T-808 de 2007.

⁶ Sentencia T-103 de 2010.

⁷ En sentencia T-669 de 1996 se desarrolló esta hipótesis, fijando que *“en tales eventos, el funcionario judicial está obligado a aplicar la excepción de inconstitucionalidad, pues la Constitución es norma de normas (CP art. 4º) o, en caso de que no lo considere pertinente, debe mostrar de manera suficiente que la disposición que, dada la situación del caso concreto, pretende aplicar tiene en realidad un contenido normativo en parte diferente a la norma declarada*

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento *iusfundamental*⁸. En otras palabras, *“puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”*⁹.

Regresando al asunto objeto de estudio, teniendo en cuenta los pronunciamientos emitidos por nuestro máximo Tribunal, relacionados con las pretensiones consignadas por la parte accionante en su escrito de tutela, evidencia esta judicatura, que la norma citada por la **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR, Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.8.5.1.2.**, invocada en la convocatoria pública, para elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), y que consiste en el aporte de la *“Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción”*, constituye una restricción que afecta los derechos de participación de las comunidades hoy reclamantes, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, por lo que se dispondrá, para el presente asunto su inaplicación.

Así las cosas, y como quiera que el requerimiento contenido en el litera b del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076 de 2015, impuesto a los Consejos Comunitarios de comunidades Negras Raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la Región del Cerro de la Falda y el Carbonal **“EUNEMIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ”** Corregimiento de PATILLAL, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, conculcan sus derechos fundamentales a la participación, a elegir y ser elegidos y a la igualdad, se procederá por medio de éste mecanismo constitucional a tutelar los mismos, en consecuencia se ordenará a la accionada **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**, inaplicar la norma citada, dejándose sin efecto el numeral b), contenido en el título de **REQUISITOS**, de la **CONVOCATORIA PUBLICA**, mediante la cual invita a las **comunidades negras**, domiciliadas en el área de jurisdicción de CORPOCESAR, a participar, en la elección de un representante miembro principal y su respectivo suplente ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023, declarando la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a dicha convocatoria, trámite que deberá iniciar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, con una nueva convocatoria.

En mérito de lo expuesto el **JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL PARA LA ADOLESCENCIA CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley;

R E S U E L V E:

PRIMERO: TUTÉLENSE los derechos fundamentales constitucionales a la **“IGUALDAD, A LA PARTICIPACION, DEBIDO PROCESO Y A LA AUTONOMIA Y AUTO DETERMINACION DE LA ETNIA DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANA RAIZAL Y PALENQUIERA”**, invocados por la señora **MARIA BEATRIZ TORRES DIAZ**, en su condición de representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la Región del Cerro de la Falda y el Carbonal **“EUNEMIA MARGARITA HINOJOSA GONZALEZ”**, vulnerados por la accionada **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**, implicándose el literal b del artículo 2.2.8.5.1.2 del Decreto 1076 de 2015,

inexequible, por lo cual puede seguirse considerando constitucional. Si el funcionario aplica la norma y no justifica su distanciamiento frente al pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre el mismo tema, estaríamos en presencia de una vía de hecho, pues el funcionario judicial decide aplicar caprichosamente de preferencia las disposiciones legales a las normas constitucionales, en contravía de expresos pronunciamientos sobre el punto del tribunal constitucional, máximo intérprete y guardián de la Carta (CP arts. 4º, 241 y 243).”

⁸ Sentencia T-103 de 2010.

⁹ Sentencia T-331 de 2014. En este mismo sentido, ver sentencia C-803 de 2006.

dejándose sin efecto el numeral b) contenido en la **CONVOCATORIA PUBLICA**, acápite de **REQUISITOS**,¹⁰ de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

SEGUNDO: ORDÉNESE al Doctor **JULIO RAFAEL SUAREZ LUNA** o quien haga sus veces, Director de la **CORPORACION AUTONOMA DEL CESAR – CORPOCESAR**, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a decretar la nulidad de toda actuación al interior del proceso de **CONVOCATORIA PUBLICA**, para elegir un representante principal y un representante suplente, ante el Consejo Directivo de CORPOCESAR, para el periodo comprendido entre el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), realizando una nueva convocatoria, permitiendo que los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras Raizales y Palenqueras de las veredas la Firma, El Guáimaro, Los Coloraitos, la Región del Cerro de la Falda y el Carbonal **“EUNEMIA ARGARITA HINOJOSA GONZALEZ”** Corregimiento de PATILLAL, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, y todas aquellas que reúna los requisitos, participen en la misma, con voz y voto, sin exigírseles, la certificación del INCODER, relacionada con la existencia de territorio colectivo adjudicado o en trámite de adjudicación¹¹, conforme se argumentó en esta providencia.

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes intervinientes por el medio más expedito. Contra esta decisión procede la impugnación.

CUARTO: EN FIRME esta decisión envíese a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. Una vez devuelta archívese por el centro de servicios de este sistema.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

LAURA MAESTRE LACOUTURE
JUEZ.

¹⁰ Ver folio 80 **CONVOCATORIA PUBLICA – CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR – CORPOCESAR**

¹¹ literal b) del artículo 2.2.8.5.1.2. del Decreto 1076, que dice: "Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción"